

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

|                  |   |
|------------------|---|
| PROCESO          | Ordinario   |
| DEMANDANTE       | Clara Esperanza Carreño Avellaneda                  |
| DEMANDADO        | Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y Colpensiones |
| PROCEDENCIA      | Juzgado 06 Laboral del Cto. de Medellín             |
| RADICADO         | 05001 3105 <b>006 2020 00283</b> 01                 |
| INSTANCIA        | Segunda   |
| PROVIDENCIA      | Sentencia Nro 179 de 2023                           |
| TEMAS Y SUBTEMAS | Ineficacia de traslado                              |
| DECISIÓN         | Revoca y acoge pretensiones                         |

Hoy, **cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandante, en relación con la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Clara Esperanza Carreño Avellaneda** contra **Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y Colpensiones**, radicado único nacional 05001 3105 **006 2020 00283** 01.

Auto

Con fundamento en la documentación allegada a esta instancia, se reconoce personería a la abogada **Erica Aristizábal Marín**, para asumir la defensa judicial de **Colpensiones**.

Sentencia

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto estudiado, discutido y aprobado según acta N° 022, que se plasma a continuación:

### **Antecedentes**

Ruega la demandante la declaratoria de nulidad de su traslado a Colfondos S.A., por vicio en el consentimiento en razón de la omisión del deber de información, y se le tenga como valida y sin solución de continuidad su afiliación al RPM, condenándose a la AFP a devolver a Colpensiones todos sus aportes, incluidos los rendimientos, sin ningún descuento, debiendo el fondo público recibirlos. Pide también condena en costas.

En sustento de ello afirma que, **nació el 05 de marzo de 1960**, en 1987 inició cotizaciones al sistema pensional en el RPM, hasta enero de 1999 cuando se trasladó a Colfondos S.A., sin que se le diera la debida información, lo que le hubiese permitido evidenciar que le era mas benéfico quedarse en el RPM. Agrega que no se le tuvieron en cuenta sus condiciones particulares, limitándose el asesor a informarle sobre rentabilidad y fluctuaciones del mercado que podrían dar lugar a una excelente mesada, estando encaminada su actuación a obtener el mayor número de afiliados en virtud de la dinámica de la libre competencia de negocios implementada por los fondos privados. Tampoco se le explicaron de manera clara y precisa los riesgos y beneficios que conllevaba su permanencia en el RAIS, el monto de la mesada y las condiciones para adquirirla. El 05 de diciembre de 2019 elevó derecho de petición a Colfondos, solicitando prueba de la asesoría y reasesoría, recibiendo respuesta el 11 del mismo mes, manifestándosele que no se contaba con los soportes, pues las mismas se realizaron de manera verbal. El 06 de

diciembre de 2019 agotó reclamación administrativa ante Colpensiones, negándosele su retorno en razón a su edad. Puntualiza que el daño que va a sufrir se verá reflejado en el monto de la mesada y en su derecho a la seguridad social, siendo latente el incumplimiento del deber de información, ilustra con cálculos actuariales la liquidación en ambos regímenes, insistiendo en la desmejora económica.

Verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, en auto del 26 de marzo de 2021, **se admitió** y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enteradas de la actuación las entidades convocadas por pasiva allegaron escritos de contestación, así:

**Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías**, acepta la fecha de nacimiento de la demandante, el traslado del RPM a esa sociedad en el año 1999, el derecho de petición que se le formulara el 05 de diciembre de 2019 y la respuesta emitida. Los demás supuestos no son ciertos, explicando que al momento de la afiliación se le informó la naturaleza propia del RAIS, especialmente que la pensión se construye con el ahorro que acumula el afiliado, y las rentabilidades, y para obtenerla debe tener un saldo para financiar un 110% del salario mínimo. También se le ilustró sobre la garantía de pensión mínima. *Dentro de la asesoría que es integral, se explican las condiciones, requisitos, ventajas y desventajas, de cada régimen pensional, incluyendo una asesoría sobre bonos pensionales y aportes a pensiones voluntarias.* **Se opuso** a las pretensiones y formuló las **excepciones** de: inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, innominada o genérica, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al RAIS y la ratificación de la misma, prescripción, compensación y pago.

**Colpensiones**, acepta la fecha de nacimiento de la demandante, su afiliación al RPM y el tiempo en que hizo aportes, la solicitud de retorno al fondo público frente a lo que se emitió respuesta negativa por estar a menos de 10 años de la edad para pensión. Los demás supuestos no le constan o no son hechos. **Resistió** las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó: imposibilidad de que Colpensiones decrete la ineficacia del traslado, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, y la innominada o genérica.

La primera instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Sexto laboral del Circuito el 26 de julio del año que corre, **absolviendo** a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra por la parte actora, se declararon implícitamente resueltas las excepciones propuestas, y no se impuso condena en costas.

La falladora, luego del análisis de la prueba aportada y de citar la normativa aplicable al caso, advirtiendo que se aparta del precedente fijado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, **estableció** que la señora Clara Esperanza se afilió al RAIS sin coacción ajena y por su sola expectativa de una futura mejor pensión o queriendo evitar tener pérdidas porque se acabara el Seguro Social, y haciendo actos de entera pertenencia al RAIS por años y décadas obtuvo rendimientos abonados en su cuenta de ahorro individual, por lo que tal acto es plenamente válido, denegando las pretensiones, pues si bien las AFP tienen responsabilidad, lo que se debe reclamar es la correspondiente indemnización de perjuicios en los términos previstos por los Decretos 692 y 720 de 1994 y no la ineficacia de traslado.

Inconforme con el fallo, se interpuso recurso **de apelación** por la apoderada judicial de la **demandante**, expresando que la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1452-2019, señaló que Ley 1328 de 2009 y el

Decreto 2249 de 2010 crearon un avance significativo para la protección de los derechos del consumidor, porque establecieron el deber asesoría y buen consejo de las administradoras de pensiones. Cita el artículo 3º del primer estatuto. Habla luego de la inversión de la carga de la prueba de la prueba, con fundamento en jurisprudencia especializada, y en los arts. 1604 del Código Civil y 167 del C. G. del P., destacando que en este caso la demandante hace afirmaciones indefinidas; también alude a la carga dinámica que obliga al fondo privado a demostrar que cumplió deber de información, lo que no aconteció.

Frente a la responsabilidad de las AFP, la constatación fáctica del deber de información es ineludible, sin que baste la suscripción del formulario con leyenda formal, pues ello no implica el conocimiento pleno y suficiente de la situación ante el sistema, existiendo frente al deber de información tres etapas, pero quedando claro que desde la creación de los fondos privados ya se tenía tal exigencia con equilibrio y asimetría, debiéndose manifestar lo positivo y lo negativo. Cita luego la normativa que ha regulado tal obligación y luego alude al contenido del artículo 272 de la Ley 100 de 1993, explicando que las normas de tal estatuto deben inaplicarse cuando se menoscaben los derechos de los trabajadores y la dignidad humana, siendo uno de los primeros el de la seguridad social, luego, debe descartarse la restricción de los 10 años para la movilidad; también es válido tener como sustento de la acción la diferencia en la mesada, pues ello conllevaría una desmejora ostensible en la calidad de vida de la afiliada en el momento en que los seres humanos somos más vulnerables, por lo que requiere acoger las pretensiones.

De la etapa de alegaciones hizo uso la apoderada de **Colpensiones**, quien luego de citar la restricción legal de 10 años para movilidad entre regímenes, y la constitucionalidad de los periodos de carencia explicada con

sentencias de la Corte Constitucional, refiere que en el *caso concreto del accionante, es claro que el traslado que realizó a la AFP Colfondos S.A. desde el 1 de enero de 1999 lo hizo conforme a la legislación que regulaba la materia, es decir, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su versión original por lo tanto se realiza dentro de la legalidad y por lo anterior que mi representada debe ser absuelta y no asumir las consecuencias de actos de terceros.*

En orden a decidir basten las siguientes,

### **Consideraciones:**

Con la prueba aportada quedan demostrados los siguientes supuestos: la fecha de nacimiento de la actora, **05 de marzo de 1960**; su afiliación al RPM administrado por el ISS, hoy Colpensiones, efectuando aportes entre el **25 de junio de 1987 y el 31 de enero de 1999** por un total de **500,14 semanas**; con formulario suscrito el 29 de enero de 1999 se trasladó a **Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías**, con efectividad a partir del 1º de marzo del mismo año y allí permanece. En comunicación del 11 de diciembre de 2019, la AFP replicando derecho de petición de la actora, entre otras, le efectuó proyección de mesada a la edad de 60 años, considerando un total de **1.397 semanas**, determinándosele en el RAIS **\$1.022.021** y en el RPM **\$2.772.106**.

Teniendo en cuenta los argumentos del recurso, lo planteado en el escrito de demanda y lo debatido en el trámite procesal, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si en el caso se cumplen los presupuestos de ley y subreglas de la jurisprudencia especializada para la declaratoria de ineficacia del acto de traslado de régimen pensional efectuado por la accionante a la AFP Colfondos S.A., y en caso afirmativo, definir lo relativo a las restituciones económicas y la condena en costas.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas que la movilidad debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto la movilidad se dio el 29 de enero de 1999**, luego se estaba en el primer estadio de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto, el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye dar a conocer la eventual pérdida de beneficios pensionales**, y supone el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema, **manifestando la AFP al contestar el hecho segundo, que no le consta la vinculación de la reclamante al régimen de prima media por involucrar a terceros, a pesar de quedar registrado en el formato** que se estaba ante **un traslado de régimen, entidad anterior ISS**, supuestos bajo los que no es posible inferir el cumplimiento de la debida ilustración bajo las reglas de la normatividad vigente, **primer estadio como ya se dijo**, y tampoco el debido acompañamiento durante la vigencia de la misma, pues lo que se evidencia es **absoluto desinterés y desdén por la suerte del derecho pensional, al punto que ni siquiera se consultó la documentación en poder del fondo ni la adosada al libelo demandatorio**, sin que tal omisión se subsane por el transcurso del tiempo.

Y es que no basta afirmar que, al ser el sistema de pensiones de carácter público, toda su regulación es legal y por ser así se presume su conocimiento por los afiliados, pues de un lado, se está ante un tema técnico que requiere manejo especializado; y por otro, es clara la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral entre otras, en sentencia SL2484-2022 cuando indica:

*... le corresponde a la administradora de pensiones acreditar el cumplimiento del deber de información, **pues exigir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que no haber recibido información suficiente corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación** [1] (CSJ SL1452-2019, reiterada en CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4426-2019 y CSJ SL4806-2020).*

***Asimismo, porque la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad quien debe observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.***

***Y es que no es razonable invertir la carga de la prueba contra la otra parte de la relación contractual, toda vez que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto del afiliado lego, a tal punto que la legislación considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros (artículo 11, literal b) de la Ley 1328 de 2009).*** Negrillas fuera del texto original.

Y en la SL1197-2021, señala:

*Así lo es, pues **en su disertación llega al punto de postular que era la accionante la que debía tener conocimiento de aquellos presupuestos, contrario a ello, debió el Colegiado considerar que el deber de información debió ser veraz, oportuno e insoslayable en este campo de la seguridad social. Las AFP tienen la imperativa obligación de brindar una asesoría suficiente, y por ello, si el afiliado alega que no fue así, como aquí ocurrió, el Tribunal debía entonces contraer su atención en elucidar si ese deber se satisfizo o no, con pruebas que lo demuestren de forma contundente, más aún, si aquella está, tal y como se indicó en el precedente transcrito, en mejor posición que los afiliados, para demostrar esas circunstancias.*** Negrillas extra texto.

Ni del formulario de afiliación se infiere la completa ilustración, así se asevera en sentencia SL4322-2022,

***Se sigue de lo anterior que el simple diligenciamiento del formulario no suple en manera alguna el deber de información, como erradamente parece haberlo entendido el Tribunal y, mucho menos, con el nivel de calidad que la jurisprudencia ha venido exigiendo, ni resulta ser demostrativo de haberse satisfecho en debida forma el mentado deber (CSJ SL1741-2021 en la que se memoraron las sentencias CSJ SL1421-2019; CSJ SL4964-2018 y CSJ SL19447-2017), ni la suscripción de ese preimpreso remueve la obligación que le asistía a las AFP de cumplir con el requisito de brindar la debida información y de probarlo en el proceso, así como tampoco lo hace la aceptación en el interrogatorio de parte del demandante de haber recibido una información, pero no con las características y profundidad debidas.***

Y en la misma decisión, se ilustra que no es posible afirmar:

*... que para la época en que el demandante se trasladó, la selección del régimen pensional no tenía relación con el monto de la pensión, pues lo que se espera al momento del traslado no es precisamente que se le informe el valor futuro de la prestación, sino que se le explique que aquella depende del capital acumulado en la cuenta individual, por lo que, las AFP como expertas en el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, cuentan con los soportes técnicos, estadísticos y actuariales para realizar proyecciones del capital que en el tiempo puede acumular el afiliado para acceder a su derecho pensional, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno al momento del traslado, como la edad, sexo, nivel de ingreso, persistencia en la cotización, etc; información con que cuenta la AFP por encontrarse registrada en el formulario de afiliación y en la historia laboral del afiliado.*

*Así mismo, advierte el juzgador de alzada que la solicitud del demandante de retornar a Colpensiones no se realizó dentro de los plazos previstos, según las sentencias de la Corte Constitucional que citó en la providencia; **sin embargo, resultaría ser un desaguizado centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Horizonte hoy Porvenir SA, con lo cual, se desdibujaría por parte del Colegiado de instancia el pedimento efectuado desde el escrito inaugural (CSJ SL1475-2021).** Negrillas intencionales.*

Ni se pueden invocar actos de relacionamiento como sustento de saneamiento, en la última sentencia se precisa sobre el particular:

*De la misma manera, encuentra la Sala que tampoco le asistió la razón al Tribunal al sostener que actos posteriores al traslado de régimen pensional efectuado en el año 2000, de aparente asentimiento con el RAIS, o las calidades personales o profesionales del demandante acumulados a lo largo de su vida, per se, convalidaron de alguna manera el hecho de que al momento de la afiliación la AFP no cumplió con el deber que le competía, como se ha explicado a lo largo de esta providencia (CSJ SL 3349-2021).*

Y en la SL1055-2022, se expuso:

*Pues bien, como se explicó en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta índole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones está en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se trasladó entre fondos privados o no retornó a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jurídico del traslado de régimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jurídico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.*

***De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongestión de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022.*** Nótese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirtúa el incumplimiento del deber de información y además ubica la discusión en actuaciones que estarían respaldadas en un acto jurídico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.

*Justamente lo anterior explica que la acción para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como también lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin más agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de régimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.*

***Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casación Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.***

Reiterándose en la SL1442-2021 que memoró el fallo CSJ SL12136-2014, que la información precisa, es un elemento esencial para pregonar que hubo **libertad** en la toma de la decisión, lo cual supone, necesariamente, el conocimiento de las consecuencias positivas y negativas de su acogimiento, acarreando su inobservancia **la ineficacia del traslado de régimen, en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que:**

*... las cosas vuelven a su estado anterior, de manera que la administradora tiene que asumir los deterioros del bien administrado, pues la ineficacia se declara como consecuencia de la conducta del fondo, al haber incurrido en la omisión de brindar la información adecuada, oportuna y suficiente al afiliado, quien tenía derecho a recibirla, no de forma gratuita, sino con cargo a la comisión de administración de aportes obligatorios y comisiones por buen desempeño que se descuentan de la cotización y de su ahorro, deducción autorizada por el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 53 de la Ley 1328 de 2009 y que permite el literal q) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer: Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente Ley.*

*Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020. Reiterada en la SL843-2022). Negrillas intencionales.*

Luego, existiendo para el caso a estudio línea reiterada y mayoritaria de la jurisprudencia especializada desde el año 2008, acogida por esta instancia como un argumento de autoridad, guardando los asuntos analizados analogía estrecha con este, lo procedente es la **declaratoria de**

**ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, AFP Colfondos S.A., y con ello su traslado de régimen pensional, pues el fondo no cumplió con el deber de información clara, cierta, comprensible y oportuna, de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio efectuado,** operando la inversión de la carga de la prueba en los términos de los artículos 1604 del Código Civil y 167 del C. G. del Proceso, sin que opere el fenómeno extintivo de la prescripción (ver sentencias CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019, CSJ SL373-2021 y SL2016-2022), lo que implica que para todos los efectos legales la señora Clara Esperanza siempre ha estado incorporada al régimen público. Asimismo, **se condenará Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías a trasladar a Colpensiones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,** los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual de la actora, junto con sus rendimientos financieros, al igual que el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el destinado al fondo de garantía de pensión mínima, **estos tres últimos conceptos** debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, (ver entre otras, sentencias SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021, SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2016-2022, SL4322-2022 y SL554-2023).

Al momento de llevarse a cabo las restituciones, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifique. **COLPENSIONES, debe aceptar el retorno de la demandante al RPMPD, recaudar los recursos que se ordena devolver y validar en la historia laboral** las semanas a las que

corresponden, para efectos del reconocimiento de las prestaciones a que haya lugar.

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento del traslado, en los términos del literal b) de la misma norma en concordancia con el artículo 271 del mismo estatuto, decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues con el traslado integro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la vinculación, máxime cuando si bien es cierto esta es una regla introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, que modificó el artículo 334 superior relativo al régimen de Hacienda Pública, que en su **parágrafo** reza: ***al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su efectiva protección.***

En atención a lo previsto en el artículo 365 – 4 del C. G. del P., **las costas en ambas instancias corren a cargo de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías** y a favor de la señora Carreño Avellaneda. En esta se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca** la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Clara Esperanza Carreño Avellaneda**, contra la **Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y Colpensiones**, para en su lugar,

**1.- Declarar la ineficacia** de la vinculación de la señora **Clara Esperanza Carreño Avellaneda** a la **AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías**, y con ello su traslado de régimen pensional, lo que implica la reactivación automática y sin solución de continuidad de la incorporación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES.

**2. Se condena a Colfondos S.A. a restituir a Colpensiones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia**, los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual de la actora, junto con sus rendimientos financieros, al igual que el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el destinado al fondo de garantía de pensión mínima, **estos tres últimos** debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos

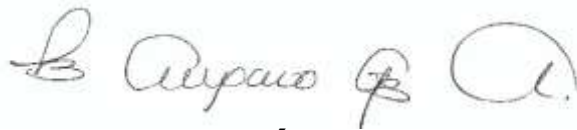
Al momento de cumplirse la orden impartida a la AFP, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifique. **COLPENSIONES, debe aceptar el retorno de la señora Carreño Avellaneda al RPMPD, recaudar los valores que le entregue Colfondos S.A. y validar en su historia laboral las semanas**

a las que corresponden, para efectos del reconocimiento de las prestaciones a que haya lugar.

**3. Las costas en ambas instancias corren a cargo de las AFP Colfondos S.A. y a favor de la demandante. En esta se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00.**

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**